El Neoliberalismo: ¡A la carga! con "nuevo" presidente en Colombia



Diego Andrés Guevara Fletcher
Economista
Doctor en Ciencias Sociales, FLACSO
Profesor Titular ESAP
Diego.guevara@esap.edu.co

Sin detenernos en el recorrido histórico de los distintos gobiernos, ya fueran de orientación liberal, conservadora, progresista o producto de diversas combinaciones y reconfiguraciones ideológicas entre estas corrientes, es posible advertir que, con matices y distintos grados de intensidad, todos contribuyeron a la consolidación del Estado neoliberal en Colombia.

La defensa de la propiedad privada, el fomento de la pequeña y mediana empresa, la consolidación de un sistema estatal de seguridad robusto, así como el propósito de preservar los privilegios de la Iglesia católica, los terratenientes y las Fuerzas Militares, también se reflejaron en otras posturas políticas, como la sostenida por el Partido Conservador entre los siglos XIX y XX.

Pese a las diversas formas de intervencionismo económico y de control estatal, la transición del liberalismo al neoliberalismo constituyó un proceso gradual, en el cual los principios del liberalismo clásico fueron reformulados para responder a las transformaciones del capitalismo, especialmente tras la crisis del Estado de bienestar y el agotamiento del paradigma keynesiano durante la década de 1970.

Al finalizar el siglo XX, Colombia experimentó importantes transformaciones en el ámbito político que repercutieron en las condiciones económicas, sociales e, incluso, ambientales. Entre ellas se destacan las reformas constitucionales; la inserción del país en la oleada neoliberal de la globalización; la creciente alineación y dependencia de la política económica respecto de organismos financieros internacionales –como el FMI, el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)–, así como el incremento del endeudamiento y la persistencia de los déficits fiscales, entre otros fenómenos.

Sin detenernos en el recorrido histórico de los distintos gobiernos, ya fueran de orientación liberal, conservadora, progresista o producto de diversas combinaciones y reconfiguraciones ideológicas entre estas corrientes, es posible advertir que, con matices y distintos grados de intensidad, todos contribuyeron a la consolidación del Estado neoliberal en Colombia. Pese a las diversas formas de intervencionismo económico y de control estatal, la transición del liberalismo al neoliberalismo constituyó un proceso gradual, en el cual los principios del liberalismo clásico fueron reformulados para responder a las transformaciones del capitalismo, especialmente tras la crisis del Estado de bienestar y el agotamiento del paradigma keynesiano durante la década de 1970.

Estas transformaciones propiciaron la profundización del neoliberalismo. En consecuencia, este modelo nunca desapareció. Por el contrario, permaneció activo, preservando los principios que lo sustentan: la concepción de un Estado fuerte, aunque subordinado a las necesidades del mercado y a los intereses del capital; el predominio de la acumulación incesante de ganancias; y la notable capacidad discursiva y de adaptación de este ideario, entre sus rasgos más característicos.

Un ejemplo que merece especial atención son los lineamientos del denominado *Disenso de Washington* (tabla N.° 1), conjunto de políticas económicas cuyo eje central consiste en "reducir la pobreza y promover una mayor equidad", aunque "sin sacrificar el crecimiento". Tales lineamientos pueden identificarse en diversos planes, programas y acciones implementados desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, iniciado en 2002, y que, al parecer, continúan vigentes. A continuación, analizaremos algunas de estas políticas desde la perspectiva de la política económica y social en el nuevo gobierno colombiano. (Ver Tabla No. 1)

El gobierno de Abelardo de la Espriella: el neoliberalismo recargado

Hace cuatro años, el gobierno de Gustavo Petro Urrego –denominado "progresista" y que, desde determinadas perspectivas, podría considerarse otra variante del neoliberalismo, en la medida en que no desinstitucionalizó la matriz de este modelo– ganó las elecciones presidenciales con una diferencia ligeramente superior a

Tabla No. 1
Propuestas del Disenso de Washington: objetivos de programa de gobierno y actividades

Disenso de Washington. Programas de actuación	Objetivos programa de Gobierno	Actividades, planes y acciones
1. Disciplina fiscal reglamentada	1.1 Crecimiento Económico	1.1.1 Ajuste fiscal para promover el crecimiento y el empleo; cumplimiento de las metas de déficit fiscal e incremento de la inversión extranjera.
	1.2 Seguridad Democrática	1.2.1 Incremento del gasto en seguridad y fortalecimiento de los mecanismos de protección ciudadana.
	1.Renovación de la Administración Pública	1.3.1 Reorganización de la administración pública con criterios de austeridad y eficiencia; eliminación de prácticas clientelistas y de la corrupción.
2. Atemperar las expansiones y contracciones del mercado	2.1 Infraestructura	2.1.1 Particularmente en vías, aeropuertos y proyectos de navegabilidad, entre otros.
	2.2 Confianza inversionista	2.2.1 Implementar medidas tributarias que favorezcan sectores como el de hidrocarburos y otras actividades extractivas.
	2.3 Política fiscal para atemperar los efectos del gasto público a través de fondos de estabilización	2.3.1 Fondo de ahorro y estabilización de los ingresos petroleros; Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.
3. Redes automáticas de protección	3.1 Promoción social a través de la protección de pérdidas de ingresos	3.1.1 Transferencias monetarias condicionadas y otras
4. Escuela también para los pobres	4.1 Mayor y mejor educación reduce la brecha de ingresos de los hogares	4.1.1 Programa Alianzas; capacitación y formación de capital humano.
5. Gravar a los ricos y gastar más en los demas	5.1 Reformas tributarias progresivas. Más ciudadanos contribuyentes	5.1.1 Reformas tributarias
6. Dar oportunidades para la pequeña empresa.	6.1 Fomento de crédito y emprendimiento para disminuir la brecha de ingresos y evadir la pobreza	6.1.1 Fondo colombiano de modernización y desarrollo tecnológico de las micro, pequeñas y medianas empresas; Apoyo a la microempresa rural; Incubadora de empresas de base tecnológica; Mujeres cabeza de familias microempresarias.
7. Reforzar los derechos de los trabajadores	7.1 Empleos remunerados y productivos para aumentar la equidad el nivel de ingresos y disminuir la pobreza	7.1.1 Atención al desempleado: sistema de protección al cesante y programas de capacitación para la inserción laboral.
8. Sanear el mercado de tierras	8.1 Ciudades amables	8.1.1 Disponibilidad de tierras urbanas; dinamización de los mercados, mejorar la calidad de vida mediante desarrollos urbanos: vivienda, agua potable, saneamiento básico y transporte.
	8.2 Tierras rurales	8.2.1 Programas: Manejo social del Campo; Programa de recuperación de tierras.
9. Servicios públicos al servicio de losconsumidores	9.1 Proveer servicios públicos confiables y administrados con transparencia. Regulación e información al consumidor	9.1.1 Manejo social de los servicios públicos en materia de regulación e información al consumidor.

Fuente: Autor con base en Birdsall y de la Torre (2001)



tres puntos porcentuales (50,44 % frente al 47,31 % obtenido por Rodolfo Hernández). Este último fue presentado como un *outsider* de la política, aunque posteriormente fue declarado culpable y condenado por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, cometido durante su gestión como alcalde de Bucaramanga.

Los analistas políticos, al parecer, no supieron interpretar las condiciones que conducirían al escenario político de cuatro años después. Como es de conocimiento público, el actual presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, es un abogado con escasa experiencia en la administración de los asuntos del Estado. Su campaña se articuló alrededor de consignas centradas, principalmente, en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana mediante el respaldo a la Fuerza Pública, la promesa de una política de "mano dura" contra el narcotráfico y los grupos delincuenciales, así como en propuestas tributarias orientadas a reducir los impuestos al gran capital.

Asimismo, ha planteado, de manera general, la adopción de regulaciones destinadas a fortalecer la inversión privada; reformas institucionales dirigidas a eliminar diversas agencias y entidades calificadas como "burocráticas" o "clientelares"; la reducción del déficit fiscal; y el impulso del sector minero-energético mediante la expansión de la explotación de petróleo, gas y otros minerales. En este último aspecto, respalda abiertamente el modelo del denominado *neoliberalismo energético*, incluyendo el uso del *fracking*.

Estas iniciativas, comparadas con las expuestas en la Tabla N.° 1, permiten concluir que constituyen, en esencia, una reedición de políticas económicas y sociales implementadas previamente durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos y, especialmente, de Iván Duque Márquez. A continuación, examinaremos algunos de estos antecedentes.

Por ejemplo, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, bajo la premisa de la "seguridad democrática", se planteó que esta constituía una estrategia fundamental para garantizar la disciplina fiscal y una fuente permanente de ingresos para el Estado. En esa perspectiva, los ajustes fiscales deberían traducirse en mayores aportes al PIB y en la generación de empleo. En esta dirección, el incremento del gasto público se concentró en el fortalecimiento de las fuerzas militares, hasta alcanzar un gasto en seguridad equivalente al 4,7 % del PIB.

En relación con las cifras de inversión extranjera, en su momento la

Quizá lo más preocupante de la discusión es que no parece presentarse una propuesta sustancialmente nueva en el gobierno entrante. Se observa, más bien, el reciclaje de viejas fórmulas y posturas que ya han demostrado limitaciones, ahora presentadas bajo eslóganes populistas, simplificadores y de escasa innovación, como el de "la patria milagro". Esta situación evidencia, una vez más, las profundas debilidades en la formación histórica y en la educación política ciudadana de amplios sectores de la sociedad colombiana.

Revista Dinero señaló: "La Inversión Extranjera Directa (IED) creció casi cuatro veces en la era Uribe, al pasar de US$2.134 millones en 2002 a US$7.201 millones en 2009. Se esperaba que en 2010 llegara a US$10.000 millones. La expansión de la inversión se concentró en petróleo, donde aumentó de US$449 millones a US$4.568 millones, y en minas y canteras, donde pasó de US$466 millones a US$3.089 millones. El crecimiento de la IED en los demás sectores fue de apenas US$1.000 millones en ese mismo periodo" (*Dinero*, 2010).

En cuanto al punto de disenso del Consenso de Washington, relacionado con la propuesta de "gravar a los ricos y gastar en los demás", durante este gobierno se realizaron cuatro reformas tributarias, todas orientadas a la creación de nuevos impuestos. Con ello se buscaba responder a la idea de que los "...gobiernos democráticos de la región deben hacer un esfuerzo para que sus regímenes tributarios sean visiblemente más 'justos'. Elevar el nivel de ingreso personal sujeto a gravamen podría llevar a un aumento significativo de la recaudación..." (énfasis propio, Birdsall & de la Torre, 2001, pp. 38-39).

Estas medidas fueron justificadas bajo el argumento de que el nivel de deuda heredado de los gobiernos anteriores era insostenible, al alcanzar el 54 % del PIB, cuando apenas un lustro atrás era inferior al 30 %. Como consecuencia de este deterioro fiscal, Colombia perdió su grado de inversión.

Durante el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón, la denominada "Locomotora minero-energética" se constituyó en una política económica sustentada, en gran medida, en la inversión extranjera directa y en la exportación de materias primas como petróleo, carbón y otros minerales. No obstante, las "locomotoras" del crecimiento durante el periodo 2010-2018 no registraron incrementos significativos, a pesar del buen desempeño de sectores minero-energéticos como los hidrocarburos, favorecidos por los altos precios internacionales. Resultó preocupante el aumento de las importaciones, que alcanzaron un crecimiento del 26 %. A ello se sumó el elevado nivel de endeudamiento del país. En este



sentido, si bien hubo crecimiento económico, este estuvo acompañado por un incremento de la deuda pública. La deuda como porcentaje del PIB aumentó un 26 %. Del total de la deuda, el 54 % correspondió a bonos, principalmente TES, y el 15 % a créditos con organismos internacionales como el BIRF y el BID.

Durante este gobierno se aprobaron cuatro reformas tributarias –Leyes 1430, 1607, 1739 y 1819–, que permitieron recaudar un total de $25,6 billones; sin embargo, estos recursos resultaron insuficientes para cerrar el déficit fiscal.

Las estrategias para reducir la pobreza y la vulnerabilidad social se concentraron en el programa "Red Unidos", una continuidad del programa implementado durante el gobierno de Uribe Vélez denominado "Red Juntos". Este modelo focalizó el acceso a la oferta social en áreas como salud, educación, vivienda y empleo. No obstante, algunos indicadores reflejan resultados limitados. Por ejemplo, Colombia pasó en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del puesto 79 al 98 en 2017, lo que significó un descenso de 19 posiciones en este ranking internacional.

En cuanto al coeficiente de Gini urbano, este presentó una reducción marginal: pasó de 0,546 en 2002 a 0,533 en 2010, una disminución de apenas 0,013 puntos. Por su parte, el IDH ajustado por desigualdad –que incorpora los efectos de la distribución desigual del desarrollo humano dentro de un país– alcanzó en 2017 un valor de 0,571, con una pérdida del 23,6 %. Aunque este indicador mostró resultados relativamente favorables frente a otros países de la región como Perú, Ecuador, Panamá y México, evidenció la persistencia de profundas desigualdades estructurales.

Durante el gobierno de Iván Duque Márquez (2018-2022) continuaron, en buena medida, los mismos lineamientos de política económica y social promovidos por su mentor político, el expresidente Uribe Vélez, los cuales se resumen en la siguiente tabla:

Tabla N.° 2
Metas propuestas y resultados del gobierno de Iván Duque 2018-2022

Metas proyectadas en el gobierno de Iván Duque 2018-2022	Cumplimiento	Resultados al año 2022
1. Reducir el índice de pobreza rural del 36 % al 28,9 % en 2022.	Sí	El índice de pobreza rural llegó al 23,3 %.*
2. Reducir el índice de pobreza extrema rural del 15,4 % al 9,9 %.	No	El índice de pobreza extrema rural alcanzó el 23,3 %.*
3. Pilar de equidad: incorporar 500.000 nuevos estudiantes en instituciones de educación superior.	No	El número de nuevos estudiantes en las IES aumentó en 25.861, equivalente a un crecimiento del 1 %.**
4. Sacar de la pobreza a 1,5 millones de personas y reducir la pobreza multidimensional en 2,5 millones de personas.	Sí	La pobreza multidimensional se redujo en 6,7 puntos porcentuales, mientras que la pobreza monetaria disminuyó en 13 puntos porcentuales.*
5.Generar 1,6 millones de empleos	No	La tasa de desempleo pasó del 10,8 % al 11,2 %.*
6. Disminuir la tasa de homicidios	No	La tasa de homicidios pasó de 23,88 a 25,27 por cada cien mil habitantes.***
7. Disminuir los cultivos de coca	No	Los cultivos de coca aumentaron en 60.000 hectáreas.****

Fuente: *Dane; **SNIES; ***Policía Nacional; ***UNODC



En el argot popular existe un adagio ampliamente conocido en nuestro país: "En el desayuno se sabe cómo será el almuerzo". Jugando con la futurología, disciplina en la que los economistas solemos incursionar con frecuencia, es posible anticipar algunos escenarios para estos cuatro años: un eventual mejoramiento de los indicadores fundamentales de la economía, como el PIB, la inversión extranjera e incluso la inflación. Sin embargo, este posible desempeño económico podría estar acompañado de costos sociales expresados en indicadores como la desigualdad, la educación y la salud, entre otros. En otras palabras, podría consolidarse una priorización de la economía de mercado sobre las dimensiones sociales del desarrollo.

Quizá lo más preocupante de la discusión es que no parece presentarse una propuesta sustancialmente nueva en el gobierno entrante. Se observa, más bien, el reciclaje de viejas fórmulas y posturas que ya han demostrado limitaciones, ahora presentadas bajo eslóganes populistas, simplificadores y de escasa innovación, como el de "la patria milagro". Esta situación evidencia, una vez más, las profundas debilidades en la formación histórica y en la educación política ciudadana de amplios sectores de la sociedad colombiana.

Referencias bibliográficas

Barba, C. (2004). Los enfoques latinoamericanos sobre la política social: más allá del Consenso de Washington. Espiral, 11(31), 85-130.

Birdsall, & de la Torre, A. (2001) El Disenso de Washington: Políticas económicas en pro de la equidad social en América Latina. Fondo Carnegie para la paz Internacional y Diálogo Intermericano.

Dinero, R. (2010). La economía que deja Uribe: Promesas Vs. Avances. Revista Dinero.

Estrada Álvarez, J. (2006). "Las reformas estructurales y la construcción del orden neoliberal en Colombia". En A. Ceceña (comp.), *Los desafíos de las emancipaciones en un contexto militarizado*. Buenos Aires: CLACSO.

Guevara D.A. (2025). *Cambio de piel mismo espíritu. (Re) Consolidación del modelo neoliberal en Colombia*. [Manuscrito de libro no publicado]

Puello-Socarrás J. F. (2020). "Nuevo neoliberalismo. Arquitectónica estatal en el capitalismo del siglo XXI", en AA.VV. Anuario de estudios políticos, no. 6. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia & Clacso. ISBN 2339-4889, pp. 29-62.